



Al contestar cite S220913G

**Destinatario:** Secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín  
**Asunto:** Recurso de reposición contra la Resolución 202250096131 de 01/09/2022

El suscrito ciudadano, identificado como aparece al pie de mi firma, de manera respetuosa interpongo recurso de reposición contra el acto administrativo de la referencia, solicitando que sea revocado, y subsidiariamente, que se aclare si los bienes con matrículas inmobiliarias 001-897953, 001-897954, 001-890459 y 001-890460, de propiedad de Jorge Willsson Patiño Toro también están cobijados por la decisión, informando por qué no se mencionan expresamente en esta; con fundamento en las siguientes consideraciones:

**1- Legitimidad para recurrir.** Soy acreedor de CONSTRUCTORA DEL NORTE DE BELLO SAS, CONSTRUCTORA INVERNORTE SAS y JORGE WILLSSON PATIÑO TORO, como se desprende del **título ejecutivo** (retíño) emanado por el Juzgado 02 Civil del Circuito de Medellín dentro del radicado 050013103002**20180017100**, que en providencia de 21 de agosto de 2018 ordenó seguir adelante con la ejecución, así:

#### RESUELVE

**PRIMERO: SE ORDENA** seguir adelante con la ejecución a favor de **SERGIO MARIO GAVIRIA ZAPATA**, en contra de **CONSTRUCTORA DEL NORTE DE BELLO S.A.S.**, representada legalmente por Jorge Willsson Patiño Toro, **CONSTRUCTORA INVERNORTE S.A.S.**, representada legalmente por Jorge Willsson Patiño Toro, y **JORGE WILLSSON PATIÑO TORO**, por las siguientes sumas de dinero:

**-MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M.L (\$1.238.470.050)**, como capital, contenido en el pagaré sin número (folio 5 cdno ppal).

-Por los intereses de mora sobre el valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L (\$992.987.555)**, valor que corresponde al capital contenido en el pagaré sin tener en cuenta los intereses de mora, desde el **13 de abril de 2018**, y hasta que se realice el pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera para cada uno de los períodos a liquidar. (Artículos 884 del C. de Comercio, 305 del C. Penal y 111 de la Ley 510 de 1999).

Esta providencia obra en el expediente de liquidación administrativa de las mencionadas constructoras, no obstante, también se [anexa en este enlace \(clic aquí\)](#).

Tal condición de acreedor de Jorge Willsson Patiño Toro me habilita para interponer el presente



recurso.

**2- Innecesariedad del acto administrativo que se impugna, a juicio de Héctor Alirio Peláez Gómez.** Varios de los afectados por actuaciones irregulares de Peláez Gómez le criticamos que se dictaran medidas cautelares sobre **bienes de terceros** y del propio Willsson Patiño, **sin que existiera un acto administrativo que expresamente les vinculara**, pues en las Resoluciones Nro. 202050060564 del 14 de octubre de 2020 y Nro. 202050074994 del 2 de diciembre de 2020 de la Subsecretaría de Control Urbanístico, sólo se habilitó la toma de posesión de los bienes y haberes de la Constructora del Norte de Bello SAS y Constructora Invernorte SAS, sin hacer referencia alguna a los bienes de terceros o del propio señor Patiño Toro, o demás administradores.

Para salir del paso, de manera orgullosa (porque el Liquidador no se equivoca), para ocultar esta manifiesta ilegalidad, Peláez Gómez, en vez de procurar enderezar los trámites mediante resoluciones que vincularan a esos terceros (como parece que con la resolución impugnada ocurre) se limitó a manifestar que las Resoluciones Nro. 202050060564 del 14 de octubre de 2020 y Nro. 202050074994 del 2 de diciembre de 2020 de la Subsecretaría de Control Urbanístico le habilitaban a decretar medidas cautelares y perseguir los bienes de terceros y del propio Willsson Patiño. Así dijo Peláez Gómez en respuesta a acción de tutela con radicado 05001310502220210037800:

**Vigésimo segundo:** El liquidador persigue de manos de terceros y socios el patrimonio para la masa reclamante y no puede privilegiar a uno sólo, ya que las acreencias superan los 730 reclamantes, según el listado de traslado común publicado en la página web del agenciamiento. La suerte de los inmuebles, después de graduados y calificados los créditos, depende de acciones revocatorias, entre otras figuras, que serán resueltas dentro de los términos legales, pero que aún no son susceptibles de definir toda vez, que la graduación y calificación de créditos es la primera decisión de fondo que por norma debe expedir la liquidación, de conformidad con el Artículo 9.1.2.3.4. del Decreto 2555 de 2010 y las medidas cautelares se generan con la expedición de las Resoluciones Nro. 202050060564 del 14 de octubre de 2020 y Nro. 202050074994 del 2 de diciembre de 2020 de la Subsecretaría de Control Urbanístico adscrita a la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, en la cual se decretó la **Toma de Posesión de los Negocios Bienes y Haberes para la Liquidación de las sociedades CONSTRUCTORA INVERNORTE S.A.S. y CONSTRUCTORA DEL NORTE DE BELLO S.A.S.**, es la que ordena las medidas cautelares por parte del liquidador. Las medidas cautelares de Toma de Posesión son precisamente decisión por medio de la cual se le comunica a los interesados que el bien está inmerso en la Liquidación Forzosa Administrativa y que en consecuencia, serán objeto de decisiones administrativas, que pueden coincidir con derechos o intereses del accionante.

Así las cosas, **se extralimitó Peláez Gómez** al dictar medidas cautelares sobre bienes de terceros y administradores no vinculados jurídicamente con las Resoluciones Nro. 202050060564 del 14 de octubre de 2020 y Nro. 202050074994 del 2 de diciembre de 2020 de la Subsecretaría de Control Urbanístico, o la Secretaría de Gestión y Control Territorial está dictando actos administrativos inocuos o innecesarios ante la existencia de las Resoluciones Nro. 202050060564 del 14 de octubre de 2020 y Nro. 202050074994 del 2 de diciembre de 2020 de la Subsecretaría de Control Urbanístico, que **a juicio de Peláez Gómez, ya le habilitan para perseguir los bienes de terceros.**



De esta situación ha conocido el supervisor de Peláez Gómez, Ospina Sepúlveda, quien se ha limitado a servir de notario de Peláez Gómez bajo el argumento de que el Liquidador goza de libertad.

Finalmente, si Peláez Gómez ya tenía la facultad de impetrar medidas cautelares contra terceros y administradores, como efectivamente lo hizo, y perseguir sus bienes, como el supervisor Ospina Sepúlveda lo toleró, no es entendible para qué se dictan nuevas resoluciones como la que aquí se ataca, que dice:

**ARTÍCULO 7: Decretar el Embargo y Secuestro de todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles de propiedad las PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.34.990.458, o de aquellos que actualmente tengan o posean a cualquier título que se hayan descrito en la presente resolución, en cualquier lugar del país donde se encuentren ubicados estos, al igual los que en lo sucesivo el Agente Liquidador **HÉCTOR ALIRIO PELÁEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.429.390 enuncie como de propiedad o posesión o a cualquier título de las personas naturales intervenidas, y que será comunicada a través de Oficio por el Agente Liquidador a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o la entidad correspondiente,**

**3- El amiguismo Conservador en el nombramiento de Peláez Gómez como Liquidador.** El médico cirujano **Carlos Mario Montoya Serna**, Secretario de Gestión y Control Territorial es del **PARTIDO CONSERVADOR**, quien nombra como supervisor de Peláez Gómez a **Roosevelt Jair Ospina Sepúlveda**, del **PARTIDO CONSERVADOR**, para que vigile a **Héctor Alirio Peláez Gómez**, quien fue elegido **a dedo** como cuota del **PARTIDO CONSERVADOR**.

En otras palabras, en la resolución que se ataca, y en otras previas, se ha premiado el partidismo político en contraposición a la objetividad que debe relucir en la administración pública, máxime en la escogencia del liquidador, figura técnica donde debe primar la calidad profesional y experiencia.

Esta actitud nepótica de la Secretaría de Gestión y Control Territorial (que obviamente negarán los implicados para no quedar en evidencia) es violatoria de la ley, pues el *“CAPÍTULO 11, LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL, SECCIÓN 1, DEL PROMOTOR, LIQUIDADOR Y AGENTE INTERVENTOR”* del decreto nacional 1074 de 2015 (que reitera el artículo 67 de la ley 1116 de 2006) establece expresamente que *“Los promotores, liquidadores y agentes interventores se seleccionarán y designarán de la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de la Sociedades”*, que tiene aplicación directa, por remisión, o por analogía, si se quiere.

Aún así, reconoce la misma Administración Municipal **que debía configurar una lista de auxiliares de la justicia**, pero que como no lo ha hecho, para, supuestamente, dar celeridad al trámite se hace la escogencia a dedo. En otras palabras, el Municipio de Medellín alega su propia torpeza, su propia desidia de crear una lista de auxiliares o utilizar una objetiva, para intentar justificar el nombramiento del copartidario político del Secretario del Despacho dándole el nombre de discrecionalidad administrativa. Así dijo Ospina Sepúlveda, Líder de Programa, en respuesta al



derecho de petición con radicado 202130445342:

Es importante resaltar que, la facultad discernida en la Subsecretaria de Control Urbanístico para la designación del Agente especial y/o Liquidador, es una facultad discrecional, mas no arbitraria, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que establece lo siguiente: “(...) *Artículo 44. Decisiones Discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa (...).*” Hasta tanto, el Municipio de Medellín no reglamente e implemente el uso de la lista de auxiliares de la justicia para designar a estos particulares que ejercen funciones públicas, por razones de interés general y de orden público, la Subsecretaria de Control Urbanístico, goza de una relativa facultad discrecional para la designación del Agente Especial y/o Liquidador, amparado precisamente en el Decreto 2555 de 2010 y en el Decreto 663 de 1993. El límite precisamente de dicha facultad

Como se aprecia, no sólo hay violación directa de las normas en que debería fundarse el acto, sino que de manera abierta se premia a Peláez Gómez otorgándole el título de liquidador por ser del partido conservador. La pregunta es, porqué no quiere la Secretaría de Gestión y Control Territorial generar una lista de auxiliares de la justicia, o utilizar la de una entidad seria como la Supersociedades, y la respuesta es sencilla, no se buscó una escogencia objetiva sino a dedo.



En la siguiente imagen se verifica que Ospina Sepúlveda es un político del Partido Conservador:

#### Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015

\* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

Boletín: 25	
Fecha Boletín:	25 de Octubre de 2015
Hora Boletín:	06:10:15 pm
Departamento:	ANTIOQUIA
Municipio:	MUTATA



Candidato			Votos	Porc. de votación	
06		JAIRO ENRIQUE ORTIZ PALACIOS PARTIDO CAMBIO RADICAL	2,465	<div><div></div></div>	35.35 %
05		ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA PARTIDO LIBERAL - <u>PARTIDO CONSERVADOR</u>	2,088	<div><div></div></div>	29.94 %

En la imagen siguiente se aprecia al doctor Montoya Serna, reconocido miembro del partido conservador:





4- La posesión de Pelaez Gómez es irregular porque se este encuentra en causal de recusación en estas nuevas actuaciones administrativas. Pelaez Gómez está inmerso en causal de recusación, en estas nuevas actuaciones administrativas (en las cuales no he realizado aún sino este pronunciamiento), conforme el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, pues está demandado por el suscrito, como persona natural, dentro del proceso ejecutivo con radicado 05001310500620210044200 que actualmente se tramita en el Juzgado 06 Laboral de Medellín, en cumplimiento de la providencia de 8 de marzo de 2022 del Tribunal Superior de Medellín, que reza:

Por lo expuesto, el suscrito la **SALA DE DECISIÓN MIXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO: DIRIMIR** el conflicto negativo de competencia, asignando el conocimiento al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, demanda del abogado Sergio Mario Gaviria Zapata en contra de Constructora del Norte de Bello SAS -en Liquidación Administrativa Obligatoria-, Constructora Invernorte SAS -en Liquidación Administrativa Obligatoria- y Héctor Alirio Peláez Gómez, para el reclamo de la sanción por *revocatoria injusta* del poder.



Conforme lo anterior, independientemente de la suerte de ese proceso ejecutivo, Héctor Alirio Peláez Gómez alcanza a tener interés directo en las reclamaciones del suscrito reclamante, ya que tiene la capacidad cierta de influir en ellas buscando el beneficio propio, y perjuicio del suscrito, para procurar salir bien librado del proceso ejecutivo planteado.

Así las cosas, Peláez Gómez se encuentra inmerso en la causal de recusación del **numeral 1 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011**, pues frente al suscrito demandante no podrá garantizar el principio de imparcialidad violando el derecho fundamental al debido proceso, pues la contienda ya está servida, y tiene su génesis en la **revocatoria injusta de poder por Pelaez Gómez** en su calidad administrador de Constructora del Norte de Bello SAS, demandante dentro del proceso con radicado 05001310301320190035800.

Así pues, incluso si el proceso ejecutivo que apenas comienza eventualmente no tuviera éxito, **perseguiré con contundencia en proceso verbal a Pelaez Gómez en sus bienes**, con fundamento en el artículo 200 del Código de Comercio, que reza (énfasis adicionado):

ARTÍCULO 200. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. **Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.**

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de **incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.**

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.

Además, de lo anterior, en los documentos contractuales se pactó la responsabilidad solidaria del administrador o representante legal por incumplimiento del contrato de mandato, como obviamente lo es la revocatoria injusta del poder.

En conclusión, independientemente de la suerte judicial, existe una causa medianamente razonable del suscrito frente a Peláez Gómez, pues es evidente el incumplimiento contractual por la revocatoria injusta de poder, existe una orden de Peláez Gómez como Administrador de Constructora del Norte de Bellos, y existen elementos legales y contractuales que permiten **llevar a Peláez Gómez a juicio, para que responda como persona natural**; motivos suficientes y razonables para que Peláez Gómez no sea imparcial con el suscrito en el presente proceso, motivos suficientes para que se aparte del conocimiento de esta nueva liquidación administrativa.

Por los mismos motivos, solicito que se acepte la causal de recusación del **numeral 5 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011**, pues como se explicó **existe una controversia económica** pendiente entre el nominado Liquidador (como persona natural) y el suscrito futuro Reclamante, que el propio Peláez



Gómez reconoce pues así lo menciona en la página 74 de la Resoluciones 002 de enero 27 de 2022, citando expresamente el proceso judicial con su radicado completo:

Con relación al crédito con Nro. 2021-658 complemento 2021-606, este fue graduado en 5 orden en atención a la solicitud, como crédito quirografario, con presentación de proceso ante la jurisdicción civil por ésta rechazada; con el recurso y con la presentación del Radicado Nro. 05001310500620210044200 del 16 de noviembre de 2021 aún sin admisión y notificación a la demandada, ante el Juzgado Sexto Laboral de Medellín, en proceso Ordinario Laboral, se modifica después de la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2021, las circunstancias en que se presentó inicialmente el crédito, razón por la cual se repone y se gradúa en primer orden y dado que la reclamación fue presentada en términos, se mantiene el rechazo, hasta que sea resuelto el proceso, previa solicitud de revocatoria de la negación, conforme lo establece el Artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010, como pasivo reclamado oportunamente y el cual fue rechazado total o parcialmente.

Como prueba de esta causal de impedimento y recusación, además de la capturas de pantalla presentadas, anexo en enlace los siguientes documentos:

- 1- [Decisión del Tribunal Superior de Medellín](#)
- 2- [Demanda contra Alirio Peláez Gómez, como persona natural](#)
- 3- [Captura de pantalla de la base de datos Siglo XXI](#)

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 32 del decreto 1749 de 2011 informo el conflicto de intereses que tiene Peláez Gómez; no sólo por la demanda que tengo en su contra sino porque cometió delitos y faltas disciplinarias al tomar medidas cautelares sobre bienes que sólo podían ser objeto de medidas cautelares con decisiones como la que aquí se estudia, y lo hizo a sabiendas que tenía el respaldo de su copartidario y que las decisiones estaban por fuera del marco de la ley, pues no se entiende como ahora sí viene a solicitar la viabilidad de la toma de posesión de bienes de Jorge Willsson Patiño Toro.

**5- Parcialidad copartidaria.** Además, quiero dejar constancia de la parcialidad de Peláez Gómez, y de la inacción de Ospina Sepúlveda, copartidarios que tiene un apoyo mucho más allá del cumplimiento objetivo de las normas jurídicas que deben cumplir

**6- Extralimitación de funciones.** Por otro lado, no se entiende por qué en la resolución censurada no se menciona en su parte resolutive los bienes con matrículas inmobiliarias 001-897953, 001-897954, 001-890459 y 001-890460, que aparecen registrados como de propiedad de Willsson Patiño, y que tienen medidas cautelares dictadas por Peláez Gómez; por lo que se solicita suficiente aclaración sobre este punto: ¿Por qué se dictaron medidas sobre estos bienes si apenas en la resolución que se impugna se ordenó la toma de posesión de bienes de Willsson Patiño? ¿Y si las anteriores resoluciones permitían tomar medidas sobre estos bienes, entonces para que se dicta la aquí censurada?

**7- Falsa motivación.** Incurre en falsa motivación Peláez Gómez al solicitar a viabilidad de la toma de posesión de bienes de Jorge Willsson Patiño Toro, cuando dice en el numeral 14.1, pues con la resolución que aquí se estudia se verifica que los requerimientos a terceros respecto de bienes que no estén a nombre de Constructora del Norte de Bello SAS o Constructora Invernorte SAS, requiere resoluciones como la presente, que vinculen directamente a esos terceros. Entonces, con los emplazamientos mencionados en este numeral sólo se reconoce que Peláez Gómez se ha pasado la ley por la faja, pues cree que el hecho que sean muchos los acreedores le da patente de corso para



violar el debido proceso a quienes no son sus amigos.

Igualmente incurre en falsa motivación Peláez Gómez al indicar que *“Por Resolución 002 del 27 de enero de 2022, se resolvió el Recurso de Reposición frente a la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2021, donde ninguna persona que tiene activos de la intervenida y que han sido objeto de requerimientos, solicitó su exclusión con prueba que acreditara la petición, quedando en firme la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2021, en el Capítulo Tercero, respecto al hecho de que no se cuenta con bienes de terceros que deban ser excluidos de la masa de bienes de la sociedad en liquidación”*, pues si bien es cierto que no hubo solicitud de exclusión de bienes a nombre de las Constructoras, esa situación no le habilitaba a tomar medidas frente a bienes a nombre de terceros o administradores frente a los cuáles no se les ha decretado la toma de posesión, cosa que tan sólo con la resolución estudiada ocurre.

Igualmente se incurre en falsa motivación cuando se manifiesta que *“las Resoluciones 202150053737 del 11 de junio de 2021 y 202150053932 del 15 de junio de 2021, donde se nombró como Agente Liquidador al señor HÉCTOR ALIRIO PELÁEZ GÓMEZ; en dicho momento no tenía el conocimiento interno de las operaciones empresariales, comerciales y negociales, situación que se ha venido develando en todas las etapas procedimentales de la toma de posesión y de la liquidación de las sociedades en mención, razón por la cual **no le era dable realizar intervenciones como las solicitadas por el Agente Liquidador** para la época de la expedición de los Actos Administrativos de toma de posesión y Liquidación Forzosa Administrativa”*, pues aunque puede ser que no se conociera la totalidad de la información comercial, si se conocía la suerte jurídica que los inmuebles que ahora dizque sorpresivamente descubren que son de MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO.

Finalmente, el correo para las notificaciones del suscrito será exclusivamente [sega2050@gmail.com](mailto:sega2050@gmail.com), no habilitando más correos para las presentes actuaciones, so pena de violar mi derecho a la intimidad.

Atentamente,

**SERGIO MARIO GAVIRIA ZAPATA**

CC 71.756.517

Notificación: [sega2050@gmail.com](mailto:sega2050@gmail.com)  
Calle 7D #43A-99 Of. 703, Medellín  
Teléfono 300 811 8854